



LOS TREINTAMIL MUERTOS DE COLOMBIA

Ana Cristina BENAVIDES GONZÁLEZ

*Si de todas formas vamos a morir en
manos de cualquiera de los ejércitos, nuestra
decisión es morir diciéndoles NO a todos.*

ORGANIZACION INDIGENA DE COLOMBIA

Nos estamos enfrentando a nuevas formas de dolor, el dolor surgido de las nuevas formas de la máquina de guerra que opera bajo la lógica capitalista de la rentabilidad armada y que atraviesa culturas, ideologías y continentes. Este dolor proviene de la soledad del que no tiene estatuto jurídico ni político y por lo tanto no existe ni como cantidad mensurable: el anónimo, que es la mayoría. Es también el dolor del que le ha sido negada la palabra dentro de la fronteras y fuera sólo existe como estigma de la imposibilidad de la comprensión o de la fetichización metonímica, como por ejemplo narcotraficante, en plena era de las comunicaciones. Es el que sabe que no será escuchado bajo su propio discurso o bajo su activa neu-

tralidad. Este dolor no nace de la muerte en el combate, ni de la división de vecinos, amigos y familiares en bandos enfrentados a muerte, en espacios y en territorios compartidos, e incluso en la propia casa. Tampoco nace de la derrota, porque sólo hay derrota cuando se tiene claro lo que está en disputa y se participa en la posibilidad del triunfo que procurará algo. Estamos hablando del dolor de los que han sido vencidos, y no precisamente en los campos de batalla. El Quijote es el primer vencido sin combate, sin la dignidad del campo de batalla, y con El Quijote se inicia la modernidad. El Quijote es irrelevante como vencido, porque no tiene estatuto jurídico. Los muertos de la guerra de Kosovo nunca existieron, porque lo que existió fue la guerra. Los treintamil muertos anuales de Colombia no existen, porque sólo existe el narcotráfico.

Con sus aproximados cuarenta y dos millones de habitantes, Colombia atraviesa en los actuales momentos una guerra interna que enfrenta a una serie de grupos en pugna por el control político y económico, expresado a través del apoderamiento, la mayoría de las veces violento, y posterior control militar de territorios y regiones. Los grupos autorreconocidos como tales que participan en la contienda armada son: la guerrilla, donde se destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los grupos paramilitares, liderados por Fidel Castaño. Además de estos, también figuran como actores beligerantes otros grupos de autodefensa o grupos privados de seguridad y las bandas de narcotraficantes, que pueden estar al servicio de cualquier bando, según su conveniencia. Por otra parte se encuentran las Fuerzas Militares del Estado, que deben enfrentarse a los bandos anteriores, situados constitucionalmente fuera de la ley, pero cuya imparcialidad no existe por su vinculación con uno de los bandos, los paramilitares. La guerrilla ejerce el control en 1071 municipalidades, lo que supone el 57% del territorio del país.

El nivel de poder y la correlación de fuerzas entre los bandos enfrentados militarmente, en este caso paramilitares y guerrilla, se mide por la extensión de los territorios apropiados, en los cuales éstos instauran, inmediatamente después de la toma, una colonización forzada a partir de una institucionalidad jurídica, administrativa, social y militar propia, que desconoce en su totalidad las reglas del Estado, constituyendo así paraestados. Este control afecta todo el orden cotidiano de la población, pues va desde el ajusticiamiento de los posibles amigos o colaboradores del bando opuesto hasta la redistribución de tierras, la instauración de los horarios de trabajo, la resolución de los conflictos intrafamiliares, la elección del alcalde y el esta-

blecimiento de las reglas de convivencia. La relación entre los actores directos de la guerra situados al margen de la ley y de éstos con el Estado dan a la guerra interna un carácter particular, dado que el Estado como tal no existe ni ha existido en la historia de Colombia, en el sentido de mediador en los conflictos internos del país y garante de la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos de los habitantes. De ahí que en la mayor parte de los territorios controlados militarmente por los grupos guerrilleros o paramilitares la instauración de un orden jurídico por éstos no sea difícil, pues no se trata de suplantar al Estado, sino de crear por primera vez Estado. Esto ha dado una lógica particular a la guerra interna, pues en Colombia *el tercero ausente*, nombre utilizado por Virgilio Zapatero en su artículo «Colombia. El tercero ausente» (*Sistema*, 148) es precisamente el Estado.

Esta relación entre los actores del conflicto o bandos en guerra y de éstos con el Estado se torna más compleja si se tiene en cuenta que este último, ante la incapacidad de garantizar un sistema jurídico justo e imparcial, e incapaz de resolver de forma constitucional los conflictos internos, delegó en manos de particulares la aplicación de la justicia y la seguridad ciudadana. Así, en 1968 el Gobierno promocionó y dio cobertura legal a grupos de civiles armados, denominados por entonces *autodefensas campesinas*, que seguirían armados por mucho tiempo, prestando servicios a quien lo necesitase. Posteriormente el fenómeno se intensificó con los denominados *Escuadrones de la muerte*, cuyo sólo nombre funcionaba como estrategia para implantar el terror en la población; eran utilizados para *limpiezas* de todo tipo, como el asesinato de gamines, prostitutas, homosexuales, delincuentes y personas comprometidas con *la subversión*. En la década de los ochenta la estrategia continuó con la creación del MAS, Muerte a Secuestradores, mecanismo que protegía directamente a la clase dominante económica y políticamente, principal afectada los secuestros. Esta clase de grupos de ajusticiamiento privado estarían presentes en toda la historia de Colombia, con diferentes nombres, apoyando al Estado en su labor de «garantizar la vida de las instituciones democráticas» y cuidar a «los ciudadanos de bien», ahorrándose con ello la necesidad de la elaboración de un plan de justicia social, propiciando un ambiente de intolerancia y exclusión, y cultivando en la población una lógica del terror.

El surgimiento de los carteles del narcotráfico en la década de los ochenta, que permite el ingreso de amplios sectores de la población a una clase social media de la que siempre habrían sido excluidos, añade a esta lógica de eliminación del

adversario la dinámica de muerte más macabra conocida en la historia de Colombia: el terrorismo y el sicariato. Con él, la legitimidad del Estado evidencia su mayor crisis, especialmente su sistema jurídico. El ajuste de cuentas entre los carteles de la droga en pugna por el control del mercado y de éstos con la policía y con quienes fuesen considerados sus detractores, desembocó en una escalada terrorista sin precedentes, donde murieron cientos de personas inocentes ante la más absoluta pasividad del Estado, siempre ausente. Por otra parte se abrían en varias ciudades, especialmente Medellín, casas o agencias de sicarios, con oficinas al alcance de la mano, a las cuales podía recurrir cualquier persona que necesitase un «trabajo especial», con plena garantía del anonimato, pues el sistema estaba construido sobre la base de la protección de éste, convirtiéndose la eliminación física en la forma más rápida de resolver las disputas cotidianas y obligando al resto de la población a armarse para la defensa propia. Con el narcotráfico la dinámica bélica adquiere nuevas dimensiones en Colombia, pues se especializa y se tecnifica la forma de la confrontación armada, haciendo precarias y obsoletas las estrategias y la infraestructura de guerra del Estado. Se trata desde entonces de sicarios y paramilitares entrenados por personal técnico foráneo en el cumplimiento de misiones especiales, relacionadas con el terrorismo, con armas de alta sofisticación, estructura de trabajo de red, que servirá en adelante para el tráfico de armas y de otros productos, canales de comunicación complejos e infraestructura de desplazamiento como aeropuertos privados y rutas establecidas y libres de la presencia del Estado, de lo cual se apropia también la guerrilla, especialmente las FARC, por su relación con grupos de narcotraficantes.

Durante la década de los ochenta el fenómeno paramilitar se consolida y masifica —propiciado por un gran número de personas armadas que fluían libremente por el territorio colombiano, sin pertenencia a los carteles desarticulados, las casas de sicariato desmanteladas y los grupos guerrilleros que venían insertándose en la civilidad sin apoyo estatal— como una forma de respuesta y *defensa* de grandes terratenientes, ganaderos, empresarios y clase política con poder económico que financian y patrocinan los grupos de autodefensa ante la recurrencia de la guerrilla, especialmente las FARC, al secuestro, el chantaje y la extorsión como forma de financiación de la organización. Se trata entonces de militares retirados, miembros de las fuerzas militares que adquieren mayores ingresos con esta actividad, campesinos entrenados y que participan de forma voluntaria o forzada, y personal ya preparado, residuo de grupos armados en vías de

desaparición. En 1989 se contabilizaban 140 grupos paramilitares. En 1994 el Gobierno regula mediante el decreto 0356 los «servicios especiales de vigilancia y seguridad privada», permitiendo la conformación de las Cooperativas de Seguridad Privada, Convivir, constituidas por personas civiles armadas que colaboraban con las Fuerzas Armadas en labores de contrainsurgencia y que terminarían a la postre confundiendo con los grupos paramilitares. Como señala Virgilio Zapatero, las relaciones entre todos estos grupos —paramilitares, grupos de narcotráfico aún presentes, y grupos privados de justicia— son estratégicas, por lo que las conexiones pueden ser episódicas o constantes, localizadas o generalizadas.

El Estado, de esta forma, es responsable de la aparición y mantenimiento del fenómeno paramilitar al incentivar y legitimar su formación, incluso recientemente, como en el caso de las Convivir, al no castigar los crímenes y la violación de los derechos humanos que estos mismos grupos cometían y al legislar, dentro de una tradición de exclusión, sólo a favor de la oligarquía colombiana. Pues el Estado trató de ser efectivo en la creación de una serie de mecanismos que permitieran castigar fuertemente el delito del secuestro, creando incluso —el cargo «zar antisequestro», al que fue sometido cada vez más frecuentemente esta misma clase, mientras otros delitos como las desapariciones, el desplazamiento forzado, las masacres, la tortura, la violación de mujeres, el desconocimiento de las zonas de paz, etcétera, no entraban en la agenda de reestructuración de la Justicia.

La palabra guerra no ha estado ausente del vocabulario cotidiano en territorios sin tradición de Estado, tomados y retomados por la fuerza, utilizados y abandonados cuando ya no se pueden usufructuar más a beneficio propio, en grupos que siguen el lema «quién no está conmigo está contra mí». Son espacios libres, casi flotantes, donde se cruzan múltiples actores violentos, generando dinámicas propias, incontrolables a primera vista por la misma rapidez de los cambios. La guerra de los esmeralderos de la región de Boyacá, que dejó 3.500 muertos en las décadas de los setenta y de los ochenta en una región aún hoy es controlada por los mineros, es una de las más atroces y nos muestra esta dinámica, que retomamos a partir del relato de la periodista Olga Cecilia Guerrero (*El Tiempo*, Bogotá, 13 de junio de 1999):

«La *guerra verde* se inició en los años sesenta y se arreció en los setenta. Al inicio de los ochenta el conflicto se desbordó. El origen fue la toma de poder de las minas de esmeral-

das de Coscuez, Muzo, Peñas Blancas, Maripí, entre otras, localizadas en las 86.000 zonas de explotación minera, áreas en las que están las actuales concesiones del Gobierno a las empresas Coexminas, Esmeracol y Tecminas, entre otras. Durante el ochenta se enfrentaron dos grupos de mineros liderados por Gilberto Molina y Carlos Murcia Chaparro “*El Garbanzo*”. Según el comisionado de paz de Boyacá, Andrés Torres Beltrán, “el conflicto inicialmente se dio entre personas de la región”. Luego apareció Gonzalo Rodríguez Gacha “*El Mejicano*”, quien le declaró la guerra a los esmeralderos, especialmente a Molina, y quiso apoderarse de la zona. El quería conectar el territorio con el Magdalena Medio, donde se encontraban las fincas y aeropuertos del cartel de Medellín. En febrero de 1989 Molina fue asesinado en Sasaima (Cundinamarca), y “*El Mejicano*” murió en 1989 en una operación de la policía. Víctor Carranza era un minero reconocido y cuando murieron Carlos Murcia Molina y Gacha, empezó a liderar a los esmeralderos».

El relato recogido por esta periodista, en palabras de uno de los integrantes de los bandos, es el siguiente:

«Mi actual compañera era la esposa de un *duro* del otro bando. Yo la conquisté para sacarle información y durante mucho tiempo me mantuvo al tanto de todos los movimientos. Al comienzo nos veíamos poco, después todos los días a pesar de que estábamos en plena guerra. Cuando nos descubrieron me tocó retirarla porque estaba en embarazo. Además ya en ese tiempo yo sin querer me había enamorado de ella... No podíamos pasar de la Quebrada Miocá, que separaba los dos territorios, porque si lo hacíamos éramos hombres muertos. Para trasladarnos a Chiquinquirá pasábamos en camiones escondidos entre la madera. Teníamos infiltrados y nos atacábamos en emboscadas, no había comunicaciones eficientes, los radios eran malos y utilizábamos cohetes de pólvora como señales cuando venía el enemigo. Los niños llevaban las razones, porque un niño pasa por donde sea. Era una guerra de verdad y en ésta todo el mundo aportaba, las armas se conseguían fácilmente. Hubo entrenamiento de ambos lados a través de mecanismos de alto nivel, pues nos preparábamos para lo peor. A mi hermano lo mató un amigo y luego a él otro amigo. En Otanche prestábamos guardia en zonas críticas como a la entrada, la salida y la plaza de mercado. Nos vestíamos de civil, camuflado del ejército o de la policía porque, como en toda guerra, se le quitaban a la del bando contrario junto con las armas. Hubo muchos desaparecidos. Los cadáveres bajaban por el río Minero. A veces el río los sacaba, a veces iban al Magdalena».

Ahora, con la mediación de la Iglesia, los bandos se pusieron de acuerdo en diez puntos que finalizarían la guerra: no ingreso de grupos paramilitares a la zona, erradicación de cultivos de coca, vinculación laboral a la ciudadanía por parte de las empresas de explotación de esmeraldas, libre locomoción en toda la zona, porte de armas con salvoconducto y rescate del Estado de derecho. El Estado vuelve a estar ausente.

Pero lo que se ha tipificado como una guerra interna también ha sido el desenlace, o la agudización, de una tradición de exclusión de la mayoría de la población y de grupos humanos y étnicos, en la acción política y en la toma de decisiones democráticas que conciernen a la vida del país. Esta exclusión tiene sus bases en la presencia hegemónica de una cultura fundamentalista basada en los principios ortodoxos de la doctrina cristiana, tradición y fe —hasta hace poco, 1991, el país estaba encomendado al Sagrado Corazón de Jesús—, que excluye cualquier posibilidad de disensión, el librepensamiento, la autodeterminación, el conflicto y la civilidad y que delegó en la Iglesia la formación académica de la mayoría de la población, la toma de decisiones de orden estrictamente civil y el protagonismo en la resolución de conflictos que competían al Estado, y que condenó a la inexistencia a todos aquellos grupos humanos que no se acogían a ésta y a sus principios.

Esta exclusión también tiene sus raíces en la elaboración de mitos basados en prejuicios y discriminaciones, que han negado la presencia de múltiples culturas y etnias, y de un continuo mestizaje, tanto dentro como fuera del país, en un sentimiento de vergüenza hacia su propia constitución plural y su riqueza racial. La clase dirigente invisibilizó estos grupos, dejó a un lado las regiones donde habitaban, y las abandonó a una confrontación desigual con los grupos de terratenientes y empresarios nacionales y foráneos que querían apropiarse de sus asentamientos por coincidir con zonas ricas en materias primas, como el petróleo. Su constitución pluricultural fue recogida sólo de palabra en 1991. Esta situación fue expresada por los mismos indígenas en el documento elaborado por la Organización Indígena de Antioquía, con estas palabras: «Somos los dueños de la cuarta parte del país. En nuestras manos están las riquezas de la biodiversidad, los minerales y el petróleo que todos se disputan, y aún así no figuramos, como no figuran las comunidades negras, los gitanos y los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina».

Finalmente esta exclusión también se fundamenta con la utilización de mecanismos violentos, como la eliminación física, para excluir a todas aquellas personas y grupos que quisiesen

hacer parte, desde opciones diferentes al bipartidismo, de la representatividad del país, o que la cuestionasen.

Esta violencia generada por la exclusión ha sido ininterrumpida desde mediados de siglo, cuando es asesinado, en 1948, por la clase dirigente el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, seguro vencedor en las contiendas electorales de entonces y que representaba los intereses «del pueblo», con lo que oficialmente se inicia una guerra civil promovida por la misma oligarquía, con la aquiescencia de la Iglesia oficial, y en la que perdieron la vida entre 200.000 y 300.000 personas. Se dirime a través de un acuerdo particular mediante el cual el gobierno del país es repartido o alternado cada cuatro años entre los dos grupos políticos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que en adelante concentrarán el poder. Es el llamado bipartidismo.

Con la muerte de Gaitán se inaugura una tradición de resolución de los conflictos de forma particular o privada, de puertas cerradas, de negociaciones a espaldas de la población, a través de prácticas que no pasan por el Estado ni por el espacio de lo público, aunque éste las avale, con consensos entre la clase dominante tradicional, a espaldas del país. El Estado se acrisoló en una clase oligárquica que lo utiliza para su propio beneficio, apoyada por las fuerzas militares y sectores de la Iglesia tradicional, y alejado por completo de las tareas de un Estado democrático o representativo. Pero además se consolida una tradición de persecución y eliminación física de todas aquellas personas, grupos, organizaciones y movimientos que se sitúan como alternativa al control del poder político y al manejo económico del país por un grupo social hegemónico y por los partidos tradicionales, lo que se ha llamado *las terceras fuerzas*, no dejando a las mismas más que la opción de la ilegalidad o la clandestinidad, so pena de la eliminación física de sus miembros. Esta suerte han corrido sindicalistas, miembros del partido comunista, miembros de la Unión Patriótica —han muerto desde 1985, cuando se crea el grupo, más de 1.500 de sus miembros—, Movimiento 19 de Abril y Grupo Esperanza, Paz y Libertad y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán.

La consolidación de partidos políticos alternos a los tradicionales ha costado la sangre de muchos colombianos. La aparición del Movimiento 19 de Abril, primer movimiento guerrillero urbano de Colombia, con amplia raigambre en las ciudades y conformado en su dirección por sectores de la clase media, tiene su origen en la imposibilidad de los nacientes sectores de la clase media de acceder al poder político o de te-

ner representatividad como tercera fuerza. El M-19 propició la aparición de un nuevo discurso político, centrado en la salida política de los conflictos del país, la participación civil, y la incorporación de nuevas opciones políticas, que culmina con la promulgación de la Nueva Constitución de Colombia de 1991, a pesar de que la mayoría de sus miembros reinsertados en la vida civil fuesen eliminados paulatinamente. Así, la promulgación de una nueva Carta, acorde con el nuevo país, y que recogiera la diversidad cultural y una nueva forma de acción política sólo se logra con la muerte de cientos de guerrilleros del M-19 y luego del EPL, reinsertados como Esperanza, Paz y Libertad.

Pero aún hoy, en medio de la guerra interna, la clase dominante sigue enclaustrada en los dogmas excluyentes que la propiciaron. Así, en el mes de mayo de 1999, el clan Ardila Lulle, uno de los grupos económicos de mayor concentración de la riqueza, sostenía que el Estado no se podía concebir sin la presencia del ejército, en momentos en que éste le imponía la Orden al mérito militar por sus contribuciones al ejército y al país. El 17 de ese mismo mes, Uribe Vélez, uno de los mayores defensores de las Cooperativas de Vigilancia Privada, las Convivir, aspirante a la presidencia de la República, realiza un acto de desagravio contra dos militares llamados a calificar servicio por el Estado, donde se reunieron más de mil personas de la clase política. El lema de Uribe Vélez en esta ocasión fue la necesidad inmediata de instaurar en el país «paz, democracia y autoridad», y el de Fernando Londoño, uno de los asistentes, el de que «el ejército es el camino de la salvación», mientras Fernando Vargas, fundador del Movimiento de Restauración Nacional en 1989, deploraba la ausencia de una derecha organizada porque estaba «seguro de que la mayoría de colombianos es de derecha; es decir, que tiene como primer referente el precepto social de la Iglesia católica».

Esta tradición de acaparamiento del Estado por y para particulares, el uso privado e individual de la política, la exclusión y desconocimiento de formas culturales diversas, la concentración de la economía, el reparto privado de los recursos de la nación, la ausencia del Estado en la mayor parte del territorio, el uso privado de la fuerza y de la seguridad pública e impunidad, unidos a la aparición de formas de economía que permean la actividad de algunos de los grupos o actores del conflicto, como el narcotráfico, y la relación entre algunos de los actores situados fuera de la ley, los paramilitares, con el Estado, han devenido en una dinámica del horror. La contienda entre dos de los bandos, paramilitares y guerrilla, se

hace con la aquiescencia del Estado y sin que éste cumpla con el mínimo papel de garantizar la vida de la sociedad civil o de aquellos grupos humanos que se quieren situar fuera de cualquiera de los bandos.

La actual intensificación de la guerra interna compromete aún más a los actores en contienda, especialmente a los grupos paramilitares, en esta lógica del horror, con un saldo catastrófico: entre 1992 y 1997 un promedio anual de 26.000 muertes violentas, 8.000 secuestros, 1.200 desapariciones forzadas y 1.000 masacres según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento señala para el primer trimestre de 1999, 75 masacres, con 379 muertes, el 37% de las cuales cometido por paramilitares y el 14% por la guerrilla. Según la misma entidad, desde 1981 hasta mayo de 1999 el número de desplazados internos es de 1.582.683, de los cuales 989.790 son menores de edad. En lo que respecta al exilio, se calcula que el 14% de la población se encuentra fuera del país. En cuanto al costo de la guerra, el Departamento Nacional de Planeación señala que los costos brutos de la criminalidad y los costos por el conflicto armado en Colombia entre 1991 y 1996 ascendieron a 17,2 billones de dólares de 1995; esto es, el 25,3% del Producto Interno Bruto (PIB), con un promedio anual del 4,2% del PIB anual en promedio.

En esta guerra, el estado de deterioro de los derechos humanos no sólo ha radicado en la utilización de prácticas que violan todos los acuerdos del Derecho Internacional Humanitario, con el saldo anteriormente señalado, sino también en la degradación de las prácticas bélicas, que incorporan el terror y el miedo mediante actos macabros de escarmiento delante de la población civil, el cierre de caminos a poblaciones con dificultades de comunicación, confinando a sus habitantes al hambre y a la muerte, violación de mujeres, intromisión en las dinámicas culturales de grupos humanos, como los indígenas, en contra del principio de autonomía y autodeterminación de estas comunidades, reclutándolos, bombardeándolos y desplazándolos de su territorio; asesinatos y matanzas masivas fuera de combate, de tal modo que el 60% de los asesinatos y desapariciones se realizan con esta característica, y hostigamiento a la población civil que guarda *neutralidad activa* por parte de todos los bandos armados que participan en la guerra, que va desde la amenaza hasta el aniquilamiento, como los grupos indígenas, los grupos afrocolombianos, campesinos, formas de organización como las Comunidades de Paz, académicos e intelectuales, ignorando su libre decisión de no apoyar a ningún bando ni participar en la confrontación armada.

En este sentido los Indígenas de Antioquía señalaban la amenaza a la supervivencia física, cultural y organizativa de su comunidad por los robos de sus bienes animales comunitarios, la zozobra permanente, la imposibilidad de brindar acompañamiento social y de no poder realizar las actividades de supervivencia, como salida a centros de abastecimiento de víveres, siembra de cultivos y caza, generándose desnutrición, y la falta de atención médica, graves enfermedades y muerte, violación de sus mujeres, desplazamientos y presión para officiar de mensajeros, guías y abastecedores de mercado. Hasta el momento se contaban en esta comunidad 42 homicidios a indígenas; 17 por paramilitares, con 6 desaparecidos; 20 por las FARC y por otros 5, con 10 desaparecidos. Esto para el grupo indígena Emberá constituye un genocidio.

El hostigamiento ha incluido también a defensores de propuestas que buscan la salida negociada de la guerra interna y a todas aquellas organizaciones que han denunciado las atrocidades de los bandos y la relación del Estado con los paramilitares, como diferentes ONG's y comités nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Pero también ha incluido al Estado como culpable por omisión o por desaprobación. Así, el pasado mes de mayo el Ejecutivo criticó la intromisión de un Tribunal Internacional de Opinión por cuestionar la falta de acción de las autoridades colombianas ante la masacre de Barrancabermeja, ocurrida en mayo de 1998, donde fueron asesinadas por los paramilitares treinta personas, calificándola de indebida pues sus funciones, según el Ejecutivo, no incluyen investigaciones de carácter judicial. El Tribunal había fallado en contra del Estado, responsabilizándolo de la masacre y le había dado una serie de recomendaciones, como separar del cargo a los miembros de la fuerza pública que de forma directa o indirecta hubiesen participado en crímenes de lesa humanidad, criminalizar las desapariciones forzadas, declarar ilegales y desmontar los grupos paramilitares y cumplir los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, como por ejemplo la ONU. Esta posición fue similar a la adoptada por la Cancillería ante el Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por oponerse al proyecto de Justicia Regional, que permite en mayor medida la impunidad. Antes se había censurado al subsecretario de Estados Unidos para Derechos Humanos, Harold Koch, e incluso a la Cruz Roja.

Esta lógica macabra, dirigida a eliminar todas las formas de organización civil propias y que se consideran como otra fuerza enemiga por los bandos de la confrontación armada, — como las Comunidades de Paz, conformadas generalmente por

campesinos que quieren no ser obligados a participar en uno de los bandos—, se puede comprender en su real dimensión a través del siguiente texto, enviado por la Comunidad de Paz de Apartadó a la Comunidad Indígena de Antioquía el 5 de abril del presente año, luego de ser enviada al presidente de la República, donde se relata la toma paramilitar a la misma Comunidad:

«A las 11:00 p.m. del domingo 4 de abril, ingresaron aproximadamente 10 hombres vestidos de civil, pantalón negro y camisas oscuras, con armas cortas y largas y granadas de fragmentación al corregimiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Durante ocho horas y media permanecieron en el casco urbano. Los hombres se pasearon por la parte central del pueblo y se acercaron a uno de los kioscos, mientras otros merodearon las casas sobre las vías centrales del pueblo. En el pueblo se encontraban viendo televisión cuatro miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos Gabriel Graciano, de 16 años de edad, y Oscar Martínez. Un grupo de los armados se dirigió a donde ellos, los insultó, los amenazó, sindicándolos de guerrilleros y de formar parte de una “Comunidad de guerrilleros”; al mismo tiempo preguntaban por los nombres de los líderes de la comunidad. Los cuatro miembros de la Comunidad de Paz fueron llevados hacia la plazuela central, junto con los campesinos Daniel Pino y Antonio José Borja. Daniel fue traído desde la vereda La Balsa, ubicada en el camino de Apartadó a San José, y Antonio se encontraba caminando hacia Apartadó. Entretanto, el otro grupo de paramilitares se detuvo en la casa habitada por Aníbal Jiménez, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, encargado de los proyectos pedagógicos de la Comunidad. A Aníbal le hicieron prender la luz, lo insultaron y lo sindicaron a él y a la Comunidad como guerrilleros. Luego le dispararon un tiro y cuando se encontraba en el suelo le propinaron otros dos. En ese momento los paramilitares que tenían detenidos a los seis campesinos en la plazuela central degollaron a Gabriel Graciano y le propinaron un tiro; al campesino Daniel Pino le abrieron el estómago, herido de esta manera intentó sobrevivir caminando hacia la bodega, donde murió posteriormente; a Oscar Martínez y Antonio José Borja les dispararon con una pistola 9 mm, quedando gravemente heridos. Los otros dos integrantes de la Comunidad de Paz corrieron y lograron salvarse. Posteriormente, y por espacio de media hora, a la entrada de San José y en sus calles los hombres armados dispararon tiros de fusil y de pistola; lanzaron tres granadas de fragmentación en los alrededores de la escuela, en la Placa de la Plaza Central y en la salida a San José de Apartadó».

En los actuales momentos el Estado viene desarrollando una lenta negociación con los grupos armados guerrilleros, sin detener la confrontación militar y con la ausencia de todos los actores sociales que participan en el país, como campesinos, grupos indígenas, grupos negros, comunidades de paz, desplazados, exiliados, antiguos grupos insurgentes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, y demás, lo que da a ésta un carácter no representativo y le niega cualquier legitimidad, pues ni el Estado ni la guerrilla representan las múltiples fuerzas del país. Por otro lado, lo que está en juego en este momento en Colombia no es sólo la salida negociada de un conflicto, ni el triunfo de un bando, sino la construcción consensuada de una nación unitaria, autodeterminada y participativa. La salida de la guerra debe pasar por las soluciones colectivas de las razones que la originan y la sustentan.

El agravamiento de la confrontación interna hasta constituirse en guerra ha generado una nueva dinámica de organización ciudadana tendente a buscar grandes consensos en torno a la finalización del conflicto y la consecución de la paz, pero también en torno a la construcción consensuada del país. Proyectos como el de las comunidades de paz y grupos de asentamiento que se proyectan desde la neutralidad activa son ejemplo de ello. Estos grupos se vienen desarrollando aun a costa de su propia vida, pues se han convertido en blanco de los grupos armados que participan en el conflicto, especialmente de los paramilitares. Esta dinámica se instaura a pesar del miedo y las amenazas e inicia una trayectoria no muy presente en la historia del país, como lo es la participación de la población en la toma de decisiones políticas. Aunque muchas de estas iniciativas han surgido como proyectos de la Iglesia y el Estado, cada vez es más frecuente la organización propia, con temor, pues pervive en el país una tradición de asesinato de líderes comunitarios, representantes y voceros.

Los 30.000 muertos anuales de Colombia, el millón y medio de desplazados, los desaparecidos anónimos y las mujeres violadas de Colombia deben estar presentes en la comunidad internacional más allá de Estados Unidos. La participación que hasta el momento ésta ha dado a la guerra interna que afronta Colombia ha estado centrada principalmente en el trabajo que en este país vienen desarrollando organizaciones no gubernamentales internacionales y que ha tratado de difundir la situación real en lo que respecta especialmente a la grave situación de violación de los derechos humanos, el altísimo nivel de impunidad, y la inexistencia del Estado en lo que respecta al nivel de degradación de la guerra. Esta participación ha terminado en sanciones,

recomendaciones y rechazos dirigidos particularmente al Estado, sin que ello cambie considerablemente la situación en lo que respecta a estos mismos hechos, pero constituyen un mecanismo de presión eficaz.

El interlocutor internacional de Colombia, como del resto de América, ha sido siempre Estados Unidos. La estigmatización ante el mundo que ha hecho este Gran Padre no sólo colocó en la frente de Colombia, como letra escarlata, el rótulo de peligrosa por haber tenido la suerte de burlarle por un par de décadas el control que venía ejerciendo sobre el tráfico de estupefacientes y mostrarle que sus tácticas de inteligencia, tan ensalzadas en la televisión, no servían de mucho ante la demanda de su propio país, sino que también la revistió de un áurea de malignidad, pernición y contagio, como ese cáncer que iba carcomiendo y descomponiendo las nuevas y puras generaciones del mundo. Los *capos* del cartel, que les habían burlado, eran presentados como la maldad pura, vulgares mestizos que se constituían en pésimo ejemplo para los restantes «tercermundistas» del nuevo orden mundial. Estigmatizada también porque muchos de sus lúcidos hombres se atrevieran a desafiar su poder, al punto de ser llamados por uno de sus mejores escritores «gringos periqueros», y porque aún a finales de siglo los grupos guerrilleros de este país, únicos presentes en el hemisferio controlado por el imperio norteamericano, le seguían llamando imperialista.

A instancias del imperio norteamericano, Colombia vive el aislamiento del resto del continente, que vigila con militares fuertemente armados sus fronteras, porque en los documentos oficiales ya se habla de ella como una *amenaza para la estabilidad de la región* y como una nación «inviabile» e «ingobernable», a pesar de que la presión de Estados Unidos sobre el país para desmantelar los carteles obligara a sus propios gobernantes a ignorar las causas mismas de su existencia —la exclusión y la pobreza—, desalentara la lucha contra los grupos insurgentes, —que pasó a un segundo lugar y que terminaría fortaleciéndolos—, abriera el espacio aéreo a naves norteamericanas que realizan labores de inteligencia sobre los carteles, mientras diseminan por buena parte de territorios de tradición campesina, negra e indígena sustancias no analizadas para erradicar los cultivos, generando también desplazamientos y miseria, y permitió la extensión de los grupos paramilitares, por la cada vez mayor debilidad de la Justicia. La posición de Estados Unidos ha sido concreta. En 1988 firmó un acuerdo de ayuda militar para Colombia contra la más poderosa insurgencia de América Latina. En 1985, Noam Chomsky decía en una conferencia

celebrada en el Instituto Tecnológico de Massachusset y recogida en *Cuadernos de Africa*, serie Documentos, número 3, que «Colombia recibe cerca de la mitad de la asistencia militar que los Estados Unidos distribuyen en el hemisferio, incrementada durante la Administración del presidente Clinton, quien se hizo con los fondos de emergencia cuando el presupuesto del Pentágono no permitía su aumento». El «zar antidrogas» también había hecho un llamado a incrementar los fondos de ayuda para la policía y el ejército a cambio de una reestructuración de las fuerzas militares y anunciaba la caída del país en las manos de los marxistas asociados con el narcotráfico. Y recientemente la Fundación Heritage recriminaba al Gobierno que «mientras la atención nacional se concentra en Kosovo, se está gestando una crisis más cerca de nuestras fronteras, en Colombia», declaración recogida por el periódico *El Espectador* el 31 de marzo de 1999. El pasado 19 de abril Chomsky decía en un artículo titulado «Juzguemos a Estados Unidos por sus hechos y no por sus palabras», publicado en *El País digital*:

«Colombia ha sido el primer beneficiario de las armas y el entrenamiento estadounidense en el hemisferio Occidental a lo largo de la década de los noventa, al mismo tiempo que la violencia iba en aumento, y la ayuda está incrementándose en la actualidad con el pretexto de la guerra contra las drogas (...) Estados Unidos responde así a la probabilidad número uno: contribuir a la escalada de las atrocidades».

Por otra parte, en la pasada 29ª Asamblea General de la OEA, finalizada en el mes de junio de 1999, Estados Unidos propuso a esta organización intervenir en un país de la región cuya democracia estuviera «seriamente amenazada», una especie de OTAN en América, aunque esta propuesta no se aprobó, se logró que fuese puesta en la agenda para la próxima cumbre hemisférica, que se celebraría en el 2000 en Canadá. Daniel Pecaute, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, señalaba en *Le Monde*, el 22 de mayo:

«Colombia necesita salir de esta situación, de este diálogo a solas con Estados Unidos. Europa debe ocupar un lugar a través de su opinión pública, pero sobre todo a partir de los gobiernos de la Unión Europea. Estos últimos deben exigir desde ahora la presencia de observadores e imponerse luego, al lado de Estados Unidos y de los países vecinos, como mediadores, sin lo cual las negociaciones corren el gran riesgo de ser un simple engaño y el fracaso, de precipitar un desastre anunciado».

En este panorama de promesas del Estado incumplidas ante los organismos internacionales y de denuncia de los mismos por la agudización de las muertes violentas y de las violaciones a todos los niveles de los derechos humanos, considerado el Estado responsable de los mismos en primera instancia, es necesario que el apoyo de la comunidad internacional europea adquiera otros visos. Esto quiere decir que su colaboración hasta el momento se ha fijado en el plano institucional, con diagnósticos y sugerencias, evaluaciones y recriminaciones, sin que ello haya movido a la comunidad internacional de base en su conjunto. Es decir, no ha creado un polo de opinión real que presione a los actores y a los organismos para el cumplimiento de los acuerdos y la salida política negociada de la guerra interna.

Este polo de opinión involucra al ciudadano corriente, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales y a los centros académicos para que éstos presionen por la salida política negociada del conflicto, vigilen el cumplimiento de acuerdos, vigilen el seguimiento del derecho internacional humanitario y sobre todo se comprometan con la vida de los sectores y personas que se han llamado neutrales activos, como la población, los grupos étnicos e investigadores, y que presionen por el regreso de los desplazados e inmigrantes a su región de origen.

La internacionalización de la guerra interna no debe entenderse o asumirse como una forma de adquirir más fuerza y sacar mejor provecho al momento de negociar, ni de establecer ganadores o perdedores, sino que debe propiciar, dentro del marco del respeto a la soberanía, una salida consensuada, con la participación de todas las personas a través de sus representantes elegidos voluntariamente y sin presión, a la guerra y la crisis económica y política. No se trata pues del cese de la guerra, del desarme de uno de los grupos o bandos, de la aniquilación de uno de los mismos ni del final de una negociación en términos de repartos a espaldas del país, lo que haría que la internacionalización del conflicto no tuviera importancia, sino de poner en un escenario internacional las causas reales de la misma, la posibilidad de hablar de todos los actores sociales y el compromiso de la comunidad en el apoyo al cumplimiento de los acuerdos, el castigo a los culpables y la vigilancia de los derechos humanos.

Gabriel García Márquez publicó en 1967 *Cien años de soledad*, utilizando más tarde esta palabra, soledad, para titular el discurso que pronunció en 1982, cuando le fue entregado el premio Nobel: «La soledad de América Latina», con lo que expli-

cita el *laberinto de la soledad* colombiana. Con esta obra, sus confrontaciones con la cultura *cachaca* y el atuendo con que recibe el premio literario, la típica *guayabera* costeña, García Márquez hizo un llamado dentro de las fronteras, mostrando que no había que tener vergüenza de esa policromía cultural y racial, tan rica en pluralidad significativa, creativa y estética, y que Colombia no debía seguir inventando historias de orígenes dignos y rancias tradiciones de sangre azul a las cuales trata de adaptar la realidad. Y fuera de las fronteras, mostrando la imposibilidad de la comprensión latinoamericana con la utilización de los mismos esquemas conceptuales con que operaban los análisis del Viejo Continente. De esta manera García Márquez introduce la necesidad del empleo de otras categorías discursivas y con ello de otros esquemas mentales. También habla del amor: «Escribo para que me quieran más» ha sido una de las explicaciones más recurridas por este autor con respecto a su acto creador, abriendo otra posibilidad de conocimiento, transida por el afecto: «Escribo para que quieran más a Colombia». Batemán, ideólogo del primer movimiento guerrillero urbano en Colombia, el M-19, también habló del amor como estrategia política, en medio de la policromía discursiva y de intereses de este país, sacado a la escena mundial por la literatura: «Necesitamos crear redes de afectos». García Márquez había hecho un llamado a la comprensión en el conocimiento, al amor en el entendimiento. Los *Cien años de soledad* siguen aún hoy en busca de compañía, abriendo el abanico de la compleja realidad de un país que ha vivido sin tener quien le escriba.
